

Las caravanas migrantes

Daniel Villafuerte

■ Doi: 10.54871/ca25es8b

Primer interrogante: ¿Qué procesos sociopolíticos cuestionan a las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno y los Estados nacionales, y qué aportaciones instituyentes refuerzan políticas de pertenencia comunitarias?

Daniel Villafuerte: Abordar el contexto de las caravanas es un tema sumamente específico y complejo, con varias dimensiones a considerar. Primeramente, nos referiremos al contexto centroamericano, en particular a las caravanas centroamericanas, aunque actualmente observamos una diversificación en este fenómeno. La migración ha experimentado un notable incremento en tiempos de paz neoliberal, superando incluso los niveles registrados durante la época de guerra en Centroamérica. Este crecimiento plantea una serie de interrogantes, vinculadas a la dinámica y la estructura económica extractivista que define a los países centroamericanos, incluyendo las maquiladoras. Esta estructura se caracteriza por una concentración del ingreso, una pobreza aguda, altos índices de desempleo y subempleo, así como una falta de políticas sociales estatales. Además, la región se enfrenta a problemas como la corrupción, el narcotráfico, las pandillas y elevadas tasas de extorsión y homicidios, lo que la sitúa como una de las zonas más peligrosas del mundo.

Otros elementos que contribuyen a esta dinámica de movilidad humana incluyen desastres naturales como el huracán Mitch de 1998, que causó una devastación considerable en varios países, especialmente en Honduras. Asimismo, los terremotos de 2001 en El Salvador, que resultaron igualmente catastróficos, dejaron un saldo de alrededor de 2.000 muertos, miles de heridos, 200 mil viviendas destruidas, más de 1 millón de damnificados y afectaron a 1500 escuelas, con pérdidas económicas estimadas en más de 1 mil millones de dólares. Además, en medio de la pandemia, en noviembre de 2020, dos tormentas devastadoras afectaron a 11 millones de personas, causando 200 muertos y dejando decenas de desaparecidos y desplazados, así como una destrucción masiva de infraestructura. Se estima que estas tormentas generaron pérdidas económicas de alrededor de 10 mil millones de dólares en Honduras.

Además de lo mencionado, existen otros factores estructurales significativos en la región, como el Corredor Seco Centroamericano, una zona donde las lluvias son escasas y que alberga a aproximadamente tres millones de campesinos que enfrentan la falta de precipitaciones, especialmente en la porción de Guatemala de esta franja. Durante el periodo actual, de abril a agosto de 2023, se le conoce como la “estación del hambre” debido a que solo el 30 % de las tierras son fértiles, lo que resulta en escasez de trabajo y falta de demanda de jornaleros. Como consecuencia, muchas personas se ven obligadas a migrar internamente dentro del país o hacia el extranjero, especialmente a México o Estados Unidos. En el año 2020, un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que aproximadamente 1.2 millones de personas hondureñas se encontraban en situación de crisis de seguridad alimentaria.

Junto con el contexto centroamericano, existe otro contexto que podría considerarse como la respuesta desafiante a todas estas corrientes migratorias, estos flujos migratorios que comenzaron a ocurrir después del proceso de pacificación. Un punto de inflexión importante en este sentido fueron los atentados del 11 de septiembre

de 2001 en Estados Unidos, los cuales provocaron una reestructuración en los planteamientos de seguridad no solo en Estados Unidos, sino a nivel hemisférico y global. Este evento condujo a la creación del Departamento de Seguridad Nacional y de varias instituciones destinadas a proteger las fronteras. Se produjo un desplazamiento de la atención de la frontera norte a la frontera sur, desde el río Bravo hasta el río Suchiate. En este contexto, se planteó una agenda de seguridad que retrataba a los migrantes como una amenaza o peligro. Este planteamiento coincidió con los esfuerzos que se venían realizando desde el inicio de la administración del presidente Fox en México, donde se estaba negociando una reforma migratoria integral conocida como la “enchilada completa”, que incluía la posibilidad de obtener la ciudadanía para los migrantes que ya se encontraban en Estados Unidos.

Esto, por supuesto, se ve interrumpido cuando México decide no condenar a los supuestos terroristas implicados en los ataques a las Torres Gemelas, lo que lleva a una serie de repercusiones. En respuesta a las presiones de Estados Unidos, el presidente Fox comienza a ceder y se establece en México una plataforma para el registro de migrantes, que incluye registros biométricos compartidos con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Más adelante, durante el mandato de Calderón, se implementa la llamada Iniciativa Mérida, que refuerza las políticas antimigrantes y, en particular, las políticas destinadas a contener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica. Además, esta situación se complica aún más con la llegada de muchos migrantes extracontinentales de África, Asia y la parte Sur de América Latina.

Pasamos de la iniciativa Mérida, con Calderón y Peña Nieto, al Acuerdo Bicentenario con el gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Básicamente, aunque hay algunas modalidades diferentes, en términos sustantivos, se mantiene esta cooperación muy estrecha del gobierno de la 4T con el aparato de seguridad de Estados Unidos. En medio de estas dos iniciativas, la Iniciativa Mérida y el Acuerdo Bicentenario, nos encontramos con una administración

como la de Donald Trump, que tuvo un discurso extremadamente agresivo hacia las personas migrantes, con amenazas muy claras hacia el gobierno de Peña Nieto en su última fase, cuando ya comenzaban las caravanas.

Con el gobierno de la 4T, se planteó la necesidad de atacar las condiciones estructurales que generan la migración, un enfoque muy interesante. Sin embargo, este planteamiento nunca llegó a cuajar en el periodo de Donald Trump. Por el contrario, las amenazas aumentaron y obligaron al gobierno de López Obrador a instituir medidas de seguridad para contener los flujos migratorios. Así es como se firmó un acuerdo, aunque de manera velada, considerando a los migrantes como portadores del mal, del narcotráfico. Incluso hoy, en la discusión más reciente, hay acusaciones de que trafican con fentanilo. Esto genera un mayor control del proceso migratorio, donde la llamada “industria de la migración”, particularmente los coyotes y los polleros, están haciendo un negocio muy jugoso, estimado entre 2.500 y 5.000 millones de dólares al año.

En medio de todo esto vamos a ver, justamente, el surgimiento de las migraciones masivas, como la Gran Migración de octubre del 2018. Esa es, digamos, la culminación de una serie de caravanas pequeñas, incluyendo las caravanas de madres de migrantes desaparecidos. En octubre será explosivo, muy visible. Curiosamente, coincide en el contexto internacional con la aprobación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, conocido también como el Pacto de Marrakech en diciembre de 2018. En términos generales, este va a ser el contexto en el cual se inscribe esta caravana que emerge en octubre de 2018 con una intención muy clara: llegar a Estados Unidos. También vale la pena decir que un poco antes comienza a registrarse un fenómeno muy interesante en México, que es justamente la solicitud de refugio. Esta solicitud de refugio empieza a crecer de manera extraordinaria en los años subsecuentes, de manera que, en los últimos tres años, 2021, 2022 y 2023, vamos a tener un crecimiento extraordinario. En 2021 tuvimos un registro de 129.751 solicitudes. En 2022, tuvimos una caída

leve con 118 mil solicitudes y en lo que va del 2023, ya hasta el mes de abril, alrededor de 49 mil solicitudes.

Es importante señalar que de este monto global de solicitudes de asilo hay una composición bien interesante. Por ejemplo, en el 2021, de este volumen de solicitudes, el 39 % correspondió a la población haitiana y el 27 % a población hondureña. En el 2000, hay que recordar que, en términos numéricos, fue la gran explosión de la movilidad haitiana con alrededor de 50 mil solicitudes. En el 2022, tenemos que Honduras representó alrededor del 26 % de todas las solicitudes, y aquí aparece Cuba con el 15 % y Haití con el 14 %. Es decir, hubo una baja muy importante con respecto al 2021. Pero ya en el 2023, en estos meses que llevamos del 2023, tenemos una población solicitante de refugio, haitiana, que representa el 38 % y Honduras el 22 %. Si sumamos la población solicitante de refugio del 2021 y 2023 son muy cercanas a las 300 mil solicitudes.

Esto tiene implicaciones, porque hay un sobrepasamiento de las capacidades del Estado mexicano para atender el procesamiento de las solicitudes. Por otro lado, hay un desbordamiento de la frontera sur y una serie de contradicciones que se van dando en Tapachula, porque ese es el epicentro donde se va a concentrar la mayor parte de las solicitudes de refugio. Esto sería más o menos el contexto general. Vemos pues que en 2018 hay una irrupción de esa invisibilidad que caracterizaba la migración. Era una migración clandestina, por decirlo de alguna manera, y hace suyo el derecho de migrar. Y esto ocurre también en medio del recrudescimiento de las medidas de control y de la violencia que se va a observar justamente en todos los países centroamericanos, particularmente en El Salvador y Honduras. Obviamente, frente a esta avalancha, esta ola migratoria, esta gran caravana, pues el Estado mexicano, las autoridades de ese momento, se ven rebasadas. Hay un esfuerzo de contención, barricadas, uso de gas lacrimógeno. Las imágenes del puente internacional Rodolfo Robles, que comunica a México con Guatemala, muestran migrantes que se arrojan al río Suchiate para evadir los ataques de la policía.

Segundo interrogante: ¿Cuáles son los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras y a qué reacciones se enfrentan?

Daniel Villafuerte: Toda esta organización de la caravana va a configurar justamente un contrapoder organizativo desde el campo de lo social, frente a todo el marco democrático constitucional que instituye el derecho internacional de los derechos humanos. Se podría decir que estas caravanas no constituyen un movimiento social en su sentido clásico. Aunque hay todo un repertorio muy interesante. Constituyen una estrategia de decisión individual de migrar con alcances identitarios que son frenados por la relación que se establece con las autoridades, es decir, el procesamiento. Por ejemplo, las solicitudes de refugio se hacen de manera individual y no colectiva. Esta caravana, esta gran cantidad de gente, evidentemente no aspira a un cambio en el sistema, sino más bien su aspiración es insertarse en el mercado laboral, tener una opción. Y ahí una de las grandes contradicciones es cómo finalmente la migración sigue al capital.

¿Y aquí hay una paradoja, cierto? Donde, desde la perspectiva del pensamiento crítico, se decía que el movimiento obrero era contra la explotación. Pero aquí se sigue al capital, porque lo que conviene es tener un empleo y ser explotado. Esta es una de las grandes paradojas y el migrante va a sufrir una superexplotación, desde que sale. Si sale con un pollero, ya tiene que pagar la cuota del pollero, entonces ya hay una explotación. Luego, todo lo que ocurre en el camino: el secuestro, la extorsión, las autoridades migratorias o del crimen organizado. Y luego, cuando llega al lugar de destino, también se somete a una explotación. Es decir, hay una triple explotación de los migrantes en este marco de este capitalismo neoliberal salvaje.

Tercer interrogante: ¿Cuáles han sido los modos bajo los que se conforman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas

de pertenencia, en lo económico, político, cultural, ambiental y por escalas de actuación (local, nacional, internacional-global)?

Daniel Villafuerte: Estas caravanas también van a definir sus alcances y limitaciones en un marco político normativo de naturaleza extraterritorial. Hay que considerar todo este ámbito de lo que constituye el proceso de tránsito. Desde Centroamérica, pasando por México y Estados Unidos. ¿Por qué ocurre esto? Porque al fin de cuentas son poblaciones móviles. No pertenecen exactamente a un territorio determinado y abarcan un espectro muy amplio de lo que se ha llamado el espacio social transnacional. Esta movilidad humana establece un campo de batalla muy interesante, también en lo discursivo. ¿Dónde se va a articular lo político y la política? Hoy lo vemos, por ejemplo, en cómo se ha exacerbado este campo, cómo gobernadores como el de Texas y Florida han radicalizado su postura contra los migrantes, porque estamos finalmente en un contexto político preelectoral, como ocurrió también en administraciones pasadas. Acordémonos de lo que ocurrió con Barack Obama, que utilizó el tema migratorio para su campaña y para ganar votos con la promesa de una reforma migratoria. Tuvo una actuación contradictoria, calificado como el deportador en jefe y jugando este doble discurso a favor de una reforma migratoria.

Entonces, las caravanas podrían considerarse un movimiento intermitente, una acción social que irrumpe en ciertos momentos con un propósito muy específico. No tiene una estructura duradera; en su contenido, hay un proyecto aspirativo individual o familiar. Además, los instrumentos jurídicos instituidos se aplican de manera casuística, otorgando visas humanitarias de manera individual y visas temporales por 45 días para transitar por el país. En todo este repertorio de movilización, hay cuestiones importantes a señalar en ese campo de batalla.

Primero, hay un cuestionamiento muy fuerte hacia las fronteras, un proceso de desfronterización y una presión hacia el gobierno federal de México y el gobierno de Estados Unidos. Un hecho

interesante es que en 2019 se formó la Asamblea de Migrantes Africanos y Africanas en Tapachula, integrada por 3.000 afiliados de varios países de África. Comenzaron a presionar fuertemente, realizando un plantón frente a la estación migratoria Siglo XXI –la más grande de América Latina–, exigiendo el paso libre y la tarjeta de residencia en México. Lograron su propósito en una negociación con las autoridades migratorias.

En 2019, también se produjo un mitin en el interior de las instalaciones de Siglo XXI, debido al hacinamiento y las condiciones precarias de los migrantes. Hubo un sobrecupo significativo, con 3.200 personas, cuando la capacidad era para 900. También se recurrió a mecanismos legales, como el amparo de más de 800 migrantes para evitar su detención por parte de las autoridades mexicanas en su tránsito hacia Estados Unidos.

En los últimos tiempos, se han organizado numerosas caravanas desde Tapachula, con demandas que incluyen servicios médicos, empleo, educación, vivienda y apoyos gubernamentales. En julio de 2022 se organizó una de las caravanas más numerosas, integrada por 15 mil miembros, que intentaba romper el cerco hacia la capital mexicana y Estados Unidos. Este año se observó una segunda caravana, denominada “Viacrucis Migrante 2023”, integrada por entre 3.000 y 4.000 miembros, con una variedad de perfiles, incluyendo familias, adolescentes, adultos solos y niñas y niños, algunos de ellos no acompañados. Estos elementos constituyen el proceso de formación de las caravanas y el repertorio de demandas que plantean hacia el gobierno federal.

Debate

Pregunta: A pesar de tener lineamientos y tratados internacionales que teóricamente deberían proteger a las personas en movilidad humana, seguimos vinculando la migración con la economía, lo cual genera procesos de securitización en la región. ¿En qué

medida, en otros espacios académicos o incluso desde el discurso gubernamental, ya sea a través de Donald Trump o en la actualidad con la 4T, se reduce el fenómeno social de la movilización y se resta la agencia de las personas migrantes al señalar factores exógenos que las manipulan? Me refiero al discurso que implica la participación de George Soros y otros poderes económicos y políticos detrás de estas movilizaciones, lo cual, desde mi perspectiva y la de otros activistas y académicos, despoja de su agencia a quienes buscan mejorar su vida en contextos precarizados, como en sus países de origen o durante su tránsito por México.

Daniel Villafuerte: Creo que este tema es sumamente relevante. En medio de la politización de la migración y del fenómeno migratorio en general, en 2018 se especuló sobre la posible injerencia de actores externos, especialmente de Pueblo Sin Fronteras. Se mencionó que este grupo recibía financiamiento del magnate Soros con la clara intención de influir en las elecciones intermedias de noviembre de 2018 en Estados Unidos. En ese momento se jugaban varios elementos importantes, incluida la posible reelección de Donald Trump, que finalmente no ocurrió. He escuchado y leído afirmaciones contundentes al respecto, especialmente por parte de personas cercanas a los migrantes como el padre Solalinde, quien asegura que detrás de Pueblo Sin Fronteras hay intereses oscuros apoyando la agenda de la Secretaría de Seguridad. En ese momento, esta institución también planteaba la existencia de intereses oscuros que estaban agitando el ambiente político en Estados Unidos.

Creo que efectivamente se trata de una especie de teoría de conspiración. Después de las elecciones intermedias, las caravanas migratorias continuaron su curso. Incluso se llegó a intervenir desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Se bloquearon algunas cuentas bancarias debido a la observación de que estaban recibiendo financiamiento para las caravanas. Recuerdo que incluso detuvieron a Irineo Mujica por un tiempo, pero luego lo liberaron al no encontrar nada con qué acusarlo. Él ha sido un activista comprometido

con estos procesos de movilización desde siempre. Por lo tanto, creo que esta perspectiva de la teoría de conspiración es bastante discutible, ya que hay una realidad muy cruda que se puede ver y palpar en los países centroamericanos. Con esto, creo que estoy ampliando el panorama, especialmente en la parte final.

He notado que se ha producido mucha literatura sobre las caravanas, pero aún quedan preguntas abiertas en cuanto a la posibilidad de elaborar conceptos sólidos al respecto. Sería interesante abordar este episodio de las caravanas desde una perspectiva más amplia y comprensiva, incluyendo un análisis geopolítico, aspecto que, a mi parecer, ha sido subestimado en gran medida hasta ahora a pesar de la amplia visibilidad que han tenido las caravanas y su impacto mediático e internacional, con la presencia de corresponsales de importantes agencias de noticias francesas, rusas, estadounidenses, entre otras, aquí en Tapachula, observando el movimiento de las caravanas, los migrantes y los solicitantes de refugio.

A pesar de todos estos elementos, considero que es necesario examinar con más detenimiento la dinámica y los posibles horizontes futuros de estas movilizaciones. Hasta el momento, no disponemos de suficientes elementos para contemplar la conformación de una agenda que desafíe el orden instituido. Se apela, en gran medida, a los derechos humanos como una de las banderas más importantes, dado que existe una violación recurrente y sistemática de los mismos, aunque en el discurso oficial se presente otra perspectiva y se cuestione la política migratoria y las medidas de contención.

Las caravanas han proporcionado diversos aprendizajes. Uno de ellos es la toma de conciencia de su realidad, que trasciende las fronteras de sus países de origen. Otro aspecto relevante es la resistencia mostrada por muchos de los participantes, quienes han intentado llegar a la frontera norte de Estados Unidos en repetidas ocasiones. Algunos testimonios de miembros de las caravanas relatan sus múltiples intentos, lo que refleja una notable resistencia para permanecer en su lucha. Además, han comprendido que

viajar en caravana les ofrece una posibilidad de minimizar riesgos y costos, ya que los coyotes –intermediarios en el proceso migratorio– cobran tarifas considerables, que oscilan entre los dos mil y quince mil dólares, dependiendo de diversos factores.

Otro aprendizaje importante es que la presión ejercida sobre el Estado ha dado resultados significativos, suavizando de alguna manera las medidas represivas ya que, desde el punto de vista político, se cuida la imagen del gobierno. Por ejemplo, en la última marcha de abril del 2023, se impidió su avance solo hasta 40 kilómetros, tras lo cual se iniciaron negociaciones que condujeron a la concesión de visas temporales y humanitarias. Esto evidencia una estrategia de negociación y un logro parcial de los objetivos planteados.

Es fundamental reconocer que este proceso también visibiliza una realidad compleja en la que se expulsan migrantes de manera constante desde los países de origen. Aunque se destaque el discurso heroico en torno a los migrantes, en realidad, detrás de esto se encuentra el flujo masivo de remesas que constituyen una parte significativa del ingreso en México y Centroamérica, representando hasta el 20 % del Producto Interno Bruto en algunos casos. Sin embargo, los gobiernos de la región muestran una contradicción al bloquear la movilidad de sus ciudadanos mediante acuerdos como el de tercer país seguro, que limita su tránsito incluso en la propia región centroamericana.

En un escenario crítico como el actual, donde se anuncia la eliminación del Título 42, utilizado como pretexto para expulsar migrantes en la frontera sur de Estados Unidos durante la pandemia, se prevé una respuesta inmediata por parte de las autoridades, como el envío de efectivos militares adicionales para reforzar la seguridad en la frontera. Esto ha generado una avalancha de migrantes intentando cruzar a territorio estadounidense, lo que refleja la urgencia de abordar de manera integral y humanitaria esta compleja situación.

Pregunta: Es muy estimulante pensar en la transición de acciones colectivas a movimientos sociales, sujetos políticos y la formación de comunidades de pertenencia, como mencionas, que suelen ser efímeras y están vinculadas a tránsitos pasajeros, entre otros aspectos. Sin embargo, tengo algunas inquietudes relacionadas con el contexto geopolítico en Centroamérica y México. Se ha hablado –tanto desde el discurso de la 4T como desde el gobierno estadounidense– sobre la necesidad de abordar los factores de expulsión que derivan de contradicciones sociales. En este sentido, se mencionan iniciativas como el Triángulo del Norte y los acuerdos de Tuxtla, que surgieron antes de la era Trump y están relacionados con la prosperidad y la seguridad. ¿Podrías ofrecernos alguna orientación o perspectiva al respecto, Daniel?

Daniel Villafuerte: Es una pregunta muy relevante que considero esencial abordar. Existe un contexto geopolítico que debe incluirse en este análisis. Desde el punto de inflexión que marcó el 11 de septiembre de 2001, se ha observado una preocupación creciente por la necesidad de contener la violencia asociada a la migración, el narcotráfico, entre otros aspectos. El crimen organizado también se ha vuelto parte de la agenda migratoria. Por ejemplo, durante la crisis de los niños migrantes en 2014, Barack Obama presionó a los gobiernos de México y Centroamérica para proponer acciones de contención. Esto llevó a la implementación del programa Frontera Sur o Plan Sur en México, que estableció una serie de retenes formales para inspeccionar vehículos y cargas en puntos estratégicos de la frontera sur, como en Huixtla, muy cercana a Tapachula. En el caso de las Margaritas, en la frontera con Guatemala, y más hacia el norte por Palenque y que colinda con Tabasco, en Playa de Catazajá, se implementó toda una estrategia de contención, con una visión militar evidente.

El Comando Sur ha estado involucrado en múltiples ocasiones en Tapachula y en esta zona de la frontera sur de México. En cuanto a Centroamérica, se planteó la Iniciativa para la Seguridad y la

Prosperidad de América Central, un programa que resultó ser un fracaso. Aunque Obama había prometido recursos significativos, inicialmente mil millones de dólares para su operación, los gobiernos centroamericanos no contaban con los 15 mil millones de dólares necesarios para hacerlo realmente efectivo. Por lo tanto, la iniciativa para la seguridad y la prosperidad no tuvo éxito y finalmente fracasó.

Si hacemos un recuento de todas las iniciativas que se han implementado, parece que son iniciativas que han fracasado. En la 4T, el Gobierno mexicano ha reiterado la necesidad de abordar las causas estructurales que impulsan la migración. A través de programas como Sembrando Vida, se están destinando recursos significativos para evitar que los jóvenes se vean obligados a migrar. Sin embargo, si comparamos la cantidad de remesas que reciben los países centroamericanos, lo que aporta el gobierno mexicano es insignificante. Además, en términos comparativos, los beneficios que un joven puede obtener a través de un programa como Sembrando Vida no se equiparan con lo que podría ganar trabajando en Estados Unidos. Es evidente que la decisión de migrar sigue siendo tentadora para muchos.

También cabe mencionar otras iniciativas adoptadas por la administración Biden-Harris, como su versión del programa Sembrando Vida, al que llaman Sembrando Oportunidades, agregando recursos adicionales. Sin embargo, la cantidad de recursos asignados resulta irrisoria en comparación con otros compromisos financieros de la administración, como los millonarios aportes en la guerra de Ucrania, que se estiman en quince mil o incluso veinticinco mil millones de dólares. Esta discrepancia plantea interrogantes sobre la gestión de la migración en términos de crisis temporales, ya que los migrantes son una parte fundamental para impulsar procesos de acumulación de capital mediante mano de obra barata. ¿Quién cosecha los campos en California y otros estados de Estados Unidos? Los migrantes. ¿Quiénes trabajan en la industria de la construcción y en numerosos servicios, como

restaurantes, entre otros? Una vez más, los migrantes. Esta realidad no solo refleja la dinámica económica y de acumulación en Estados Unidos, sino que también plantea interrogantes sobre las políticas migratorias y su relación con la mano de obra migrante. Este fenómeno se vuelve aún más relevante al considerar que los migrantes, al ser una mano de obra barata y en muchos casos ilegalizada, no reclaman derechos laborales ni buenas prestaciones, lo que ayuda a mitigar la inflación subyacente y plantea una serie de consideraciones laborales.

Pregunta: ¿Hay alguna forma en que las alianzas entre las caravanas y grupos más o menos organizados, así como los grupos locales, aborden la amplia agenda de las caravanas, que incluye cuestiones nacionales, supranacionales e internacionales, manteniendo una presencia local? Además, solo para aclarar, ¿el viacrucis de 2023 es lo mismo que la Caravana de la Resistencia desde el sur, o son procesos organizativos distintos?

Daniel Villafuerte: Quisiera destacar la importancia de la alianza con las caravanas, especialmente a nivel de ONGs. Ya mencionamos el valioso acompañamiento moral y jurídico proporcionado, por ejemplo, por Pueblos sin Fronteras. Junto con ellas, hay una variedad de otras ONGs, particularmente destacadas en Tapachula, que brindan asesoría y apoyo. Esta colaboración ha facilitado la organización y presentación de una gran cantidad de demandas legales y amparos. Todo esto ha sido posible gracias a la asesoría y dirección de estas ONGs, así como de otras ubicadas en diferentes regiones del país.

FM4, en particular, ha sido una organización muy relevante en el apoyo a los medios. Si bien existe una alianza, no ha sido tan masiva ni contundente como debería ser, dada la magnitud del fenómeno migratorio. Es necesario magnificar este tipo de alianzas y apoyos para elevar la organización de los migrantes a otro nivel.

Pregunta: Mi interés radicaba en identificar, desde la perspectiva mexicana, las organizaciones de derechos humanos que coinciden con la perspectiva más amplia que mencionaba en la pregunta anterior. No solo se trata de la necesidad inmediata derivada de los derechos inherentes a la condición humana, sino también de las alianzas. Me interesa saber si existen en México organizaciones legítimas y activistas de derechos humanos que compartan la perspectiva que usted estaba presentando.

Daniel Villafuerte: Sí, hay otro elemento importante que omití mencionar: el acompañamiento de la Iglesia, en particular de los jesuitas, quienes han desempeñado un papel destacado en este sentido. Sin embargo, tengo la impresión de que en algún momento el protagonismo que tenían los jesuitas en este ámbito disminuyó un poco debido a ciertas directrices desde Roma, del Papa, para impulsar el apoyo y la alianza con los migrantes. Aunque parece que Roma redujo un poco la intensidad de estas directrices, lo que se reflejó incluso a nivel local en Chiapas, los jesuitas siguen realizando un trabajo sumamente importante y relevante, brindando refugio, acompañamiento y asesoramiento. Conozco a algunos colegas jesuitas con quienes he conversado extensamente sobre este tema y sobre la preocupación que expresan diariamente.

Moderador: En México, existen alrededor de 286 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por, para y desde las personas en movilidad humana. Dentro de este panorama, el involucramiento de la Iglesia Católica, a través de congregaciones religiosas y diócesis, es evidente. Aproximadamente un 70 % de estas organizaciones tienen un carácter religioso, mientras que el resto somos laicos. Como mencionó el doctor Villafuerte, existen distintas redes, entre las que destacamos nuestra participación en la Red de Documentación de Defensores de Migrantes (REDODEM). Además, hay redes de casas en el norte y sur del país, donde nos congregamos para brindar atención de manera articulada a esta población.

Quisiera agregar, como punto final, que estos movimientos sociales, incluidas las caravanas, no se originan exclusivamente en la movilización de sur a norte. Observamos cómo los procesos de inmovilidad dentro de México, en el contexto de la securitización y la geopolítica internacional, también desempeñan un papel importante. Este contexto ha generado una diversidad de movilizaciones con objetivos específicos, como el aumento en las solicitudes de condición de refugiado. Por ejemplo, el incremento de solicitudes de refugio llevó a personas a plantarse frente a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado en Ciudad de México, generando presión para obtener respuestas.

Este tipo de movilizaciones, muchas veces invisibilizadas, evidencian cómo los instrumentos jurídicos actúan de manera casuística según los intereses del Estado mexicano en abrir o cerrar la movilidad. En resumen, estas movilizaciones, que se consolidan a través de los movimientos de acuerpamiento de caravanas, están evolucionando y generando nuevas facetas. Es un fenómeno dinámico que merece nuestra atención continua.

Daniel Villafuerte: Es crucial considerar la participación de la sociedad organizada a lo largo del país, con la finalización del título 42 y la implementación del título ocho en una versión más rigurosa. Se anunció que se aplicará de manera estricta con los países aliados para evitar que las personas lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Existe una clara consigna para detener la llegada de personas incluso aquellas que atraviesan el tapón del Darién, donde el año pasado se desbordó con la llegada de más de 240 mil migrantes de diversos países. Esta situación lleva a que el Departamento de Estado y el Comando Sur estén detrás de las reuniones diplomáticas, instando a Colombia, Panamá y los países centroamericanos a evitar el paso. Es evidente que la política migratoria se reduce a una política de contención, sin una separación clara entre ambas. Esta cohesión refleja el enfoque actual hacia la gestión de la migración.